

la libertad de la iglesia en la argentina

• ANGEL M. CENTENO

EL análisis del problema de la libertad de opinión de la Iglesia en la Argentina obliga a considerar previamente su situación real en el país y muy especialmente en relación con el Estado. Es peculiar esa situación: no hay religión oficial como en Gran Bretaña, Grecia o Birmania; no hay una situación de indiferencia oficial laicista como en los estados con Iglesia separada de tipo Francia o Uruguay; no se trata de una posición adversa como en la Unión Soviética o China continental; ni de una nación laica pero íntimamente vinculada a lo religioso como Israel o Egipto. Es nuestro caso el de una religión sostenida por el Estado, para emplear el término constitucional bastante adecuado, entendiendo por ese sostenimiento algo moral y material a la vez.

El vínculo que oficialmente une a la Iglesia con el Estado argentino es el Patronato, institución caduca que la Iglesia no admite en este caso y que se ejerce especialmente en lo referente a tan

importante asunto como el de la designación de los Obispos. Pero no es un vínculo real ni auténtico en relación con el país, como lo es en cambio la presencia de la Iglesia en cada uno de los episodios de nuestro desenvolvimiento cultural, social, político y, desde luego, en la conciencia de sus fieles que declaran serlo cuando así son preguntados en censos o estadísticas (dato que creemos valioso en su cifra habitual del 80 al 90 % por lo menos en un sentido sociológico).

Aquel Patronato es una verdadera traba para la libertad de la Iglesia, traba teórica pero que puede manifestarse como de hecho ha ocurrido dificultando la vida interna de esa Iglesia y su comunicación habitual. En épocas recientes su aplicación, aunque muy discutible jurídicamente en esos casos, pudo efectivamente trabar aspectos no triviales que en última instancia afectaban a la vida religiosa del pueblo. A principios de 1955, por ejemplo, las bulas de designación de Monseñor Martínez para la diócesis de

San Nicolás quedaron retenidas en la Subsecretaría de Culto impidiéndole asumir su cargo hasta después de la revolución. En ese mismo año Monseñores Tato y Novoa fueron exonerados de cargos eclesiásticos en la Arquidiócesis de Buenos Aires. A principios de 1958 la Corte no daba acuerdo para el pase de bulas designando a Monseñores Lafitte y Schell Coadjuutores con derecho a sucesión en Buenos Aires y Lomas de Zamora, reteniéndolas hasta que el gobierno constitucional solucionó la cuestión, que se planteaba grave, al asumir el poder.

En 1961 se planteó una situación difícil al asumir Monseñor Di Pasquo la diócesis de Avellaneda antes de prestar el clásico juramento. En virtud de este mismo juramento hubo funcionarios que propusieron que se impidiera al Cardenal Coppello asumir su cargo de Canciller de la Iglesia. Y no mencionaremos más episodios, bastándonos recordar el caso de Monseñor De Andrea con presidente católico y canciller católico militante, para señalar que no es utópico el pensar que la libertad de la Iglesia tiene sus límites en nuestra patria.

El concepto de que ella es uno de los poderes del Estado, por extensión y aun con una interpretación simpática, es muy común a políticos y aun se da en eclesiásticos, auténticos regalistas sin saberlo. Es ya del ritual periodístico y protocolar la mención de que a tal acto asistieron las "autoridades civiles, militares y eclesiásticas" del lugar, incluyendo en ella a las altas jerarquías estatales. Se ha dado el caso de que un Obispo, propuesto por el Poder Ejecutivo al Santo Padre para una diócesis vacante, agradeciera por nota al gobierno esa presentación olvidando la posición de la Iglesia en esta cuestión y sin

reparar en el significado que ese paso podría tener, de haberse concretado.

No es sorprendente, así, la insistencia con que un importante funcionario proponía, ocupando una elevadísima posición en el país, que la Subsecretaría de Culto tramitara que la Arquidiócesis de Buenos Aires quedara interinamente confiada durante unos meses a un destacado sacerdote, para lo cual su entonces titular Monseñor Laffite podría tomar vacaciones, satisfaciendo así méritos de aquel sacerdote.

Estos ejemplos demuestran el desconocimiento cabal que existe de lo que es la Iglesia y de cuáles son sus relaciones con el Estado según su verdadera misión en la sociedad, aún sin hablar del plano sobrenatural. La Iglesia es respetada, es temida, es amada en muchos sectores, pero eso en cuanto factor de poder, de unidad pacífica y ordenada. Y así ha podido decirse que colabora con el Estado, y es un "valiosísimo elemento en la tarea que debe cumplir el Gobierno".

En una palabra: el concepto de separación de Iglesia y Estado, que los Obispos percisaran para la Argentina en forma colectiva en 1955, está sustituido en esta mentalidad que describimos por el de "rama espiritual del Estado".

Afortunadamente, es creciente entre los católicos y se ha visto en el Concilio, un deseo de deslindar cada vez más los planos de acción del poder civil y el poder espiritual, lo cual no quiere decir llegar a la "separación moral" mencionada por el Episcopado. En la Argentina, si bien por ahora no parece viable la concertación de los acuerdos proyectados con la Santa Sede en 1961 ni la descalificación oficial del Patronato preparada para 1962, sí es factible influir a la opinión católica para que asuma su responsabilidad

individual y comunitaria ante muchas situaciones concretas que deben definirla como auténticamente católica. El Presupuesto de Culto es un ejemplo de ello.

Para este ejercicio asciende a 150 millones de pesos, en un total de 346 mil millones o sea un 0,04 %, y un 7 % del presupuesto del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto. Es decir que, si contáramos sólo con un millón de católicos dispuestos a sostener su culto, un promedio de 150 pesos por persona bastaría para ese fin. Creemos que si así se enfocara y diera a conocer la cuestión, como en otros países, el nuestro superaría esa cifra que actualmente el Estado entrega en sueldos y gastos según se lo manda la Constitución y lo exige su deber de reparar injustas apropiaciones.

Muchos somos testigos de que la dependencia de la Iglesia como órgano del Estado es una idea profundamente arraigada en el pensamiento de otros muchos con atribuciones de gobierno, cogobierno y legislación. Y que no siempre la Iglesia por parte de sus hombres ha hecho lo necesario para corregir ese concepto, que está lejos de ser la correcta apreciación de la Iglesia como elemento esencial en la vida de la nación, esencial por su magisterio y por su conducción espiritual.

Hoy, sin embargo, es evidente que la posición de la Iglesia ante esos ojos ha variado. Ya no se la ve como necesitando apoyos que, en ciertas épocas, pudo alguien creer que en verdad necesitaba. Ya no se la ve vinculada a un gobierno, a una clase social, a grupos económicos determinados. No es tal vez la situación de la Iglesia chilena, pero tampoco la de la colombiana. Está bien plantada en el camino de la adecuación a las necesidades

de la comunidad y al desarrollo de los pueblos en que vive.

Desde Juan XXIII, es notorio que no sirve el criterio clasificador con el cual tantos organismos encasillan a la Iglesia: como uno de los "factores morales" de que, junto a otros de índole diversa, dispone la sociedad occidental y cristiana para defenderse del comunismo o impedir su progreso. Los pontífices enseñan y obligan: enseñan concretamente qué es lo que los católicos han de practicar ante cada una de las dificultades prácticas que vive el mundo, y obligan a que lo hagan ya. No admiten más dilaciones para estudiar encíclicas o empaparse de los principios.

Los dos últimos papas han denunciado los dos problemas más graves del momento: el del subdesarrollo y el del ateísmo. Pero no se han ceñido a lamentarse y condenar sus causas, sino que han procurado *comprenderlos e ir a esas causas*, y colocar a la Iglesia frente a ambos para que dé las normas morales y las aplicaciones prácticas que la caridad exige a sus propios hijos.

En la medida en que la Iglesia y los católicos argentinos actuemos y hagamos actuar, la Iglesia será libre, y poco podrá importar la traba burocrática o el silencio que ante ella se ha guardado por parte de quienes hacen opinión. Hoy se dice, y es cierto, que la Iglesia "es noticia", y que todo lo atinente a ella interesa y atrae; lo cual es seguramente fruto del agresivo pontificado de Juan XXIII y de su sucesor. Pero de nosotros depende que la noticia sea, como lo fue hace siglos, el Evangelio, y que él atraiga porque se desea vivirlo. Y que se desee vivirlo porque sea claro para todos, y no

para los grupos de estudio o los centros de sociología, qué es lo que en este inminente 1965 se debe obrar, después de haber visto y juzgado tanto tiempo.

Pensamos, pues, que la cuestión de la libertad de la Iglesia entre nosotros no está ni mucho menos supeditada tan sólo a la que los poderes públicos le otorguen. Ellos, es verdad, pueden interferirla de modo violento o suave, con propósito hostil o por una pura aplicación irrestricta de un estricto Patronato.

De la violencia hostil tenemos pruebas recientes en los episodios desencadenados a fines de 1954, los cuales no han sido suficientemente estudiados en su fondo y en su auténtico sentido; los católicos y muchos que no lo eran enfrentaron directamente a un poder que atropellaba sus derechos espirituales, y en ese enfrentamiento se alinearon aun quienes políticamente habían sido hasta entonces partidarios de ese poder.

Contra un "patronatismo" riguroso no hay, en cambio, fácil actitud, pues no suele ser producido por un propósito contrario a la Iglesia o al sentimiento religioso como en el otro caso. El pensamiento oficial de las actuales autoridades es claro al respecto, y así ha podido declarar el Presidente que "una de las manifestaciones de la potestad soberana del Estado es el ejercicio del Patronato" el cual, añade, es por ello irrenunciable. Y el Ministro de Culto ha agregado que el gobierno ejercerá el Patronato "como afirmación de la soberanía del Estado argentino", ratificando un concepto que el anterior gobierno constitucional estaba empeñado en desmentir. Pero nos parece que ello trasunta sólo un punto de vista liberal antiguo que muchos estadistas han sostenido alguna vez para com-

probar, luego, su real inexactitud. Sin ser agresiva esta actitud hacia la Iglesia, es desde luego desfavorable en cuanto declara válida una conducta que había sido dejada de lado por ficticia y por incongruente.

Hace falta el escritor católico argentino que aborde el extenso tema de la posición real de la Iglesia y su jerarquía ante los gobiernos latinoamericanos, especialmente las dictaduras. De esa posición ha derivado no pocas veces una dificultad concreta para la libertad de la Iglesia y de los católicos como tales, que es el otro aspecto que queremos mencionar al decir que su libertad no está solo relacionada con el poder civil.

En otras palabras, que la gran libertad que deseamos y necesitamos para la Iglesia es la que encontrará en el pueblo al cual sirve, en el afecto sincero y en el respeto intelectual hacia ella *en el propio ambiente*, y no sólo en abstracto o considerándola como venerable institución universal que ha hecho mucho bien al mundo. Ese afecto y ese respeto surgen natural y espontáneamente ante actitudes lógicas y consecuentes con principios, y no surgen por la mera enunciación y prédica de éstos así como no se dan cuando no se ven esas actitudes que, aun existentes, no son comprendidas.

Pueden los Estados proteger, promover y favorecer todos los aspectos de la vida de la Iglesia en un país, y es justo que así suceda en la Argentina pero no habrá libertad para la Iglesia en su sentido más pleno si la rodea un muro de incompreensión o de indiferencia que los católicos hemos de quebrar con nuestra acción vital, cuya ausencia es la que en verdad levanta, mantiene y hace crecer esa incomunicación. ♦